

¿Quiénes diseñan la democracia paritaria? Estrategias y acciones de las feministas institucionales

Esperanza Palma Cabrera¹

Lorena Vázquez Correa²

Resumen

Este ensayo se propone analizar la progresiva construcción de una democracia paritaria a partir del análisis del activismo de las feministas institucionales a través de un conjunto de intervenciones en la arena estatal. Se examinan siete políticas públicas como ejemplo de estas intervenciones: la creación de los institutos de mujeres, los presupuestos públicos con perspectiva de género, las comisiones y unidades de género en el poder legislativo, la tipificación del feminicidio y la ley de acceso a una vida libre de violencia, las cuotas de género y la paridad, las instituciones electorales y las leyes relativas a la violencia política en razón de género y la violencia digital. Como se argumentará, el activismo feminista institucional ha sido crucial para la visibilización y avance de agendas por la igualdad, pero no ha sido suficientes para combatir problemas como la violencia de género.

Palabras clave

Democracia paritaria, feminismo institucional, igualdad sustantiva

¹ Doctora en Ciencia Política. Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-A.

² Investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (México).

En el mapa complejo de los feminismos, hay una corriente que ha impulsado políticas para la igualdad de género y la construcción de una democracia paritaria desde la arena institucional. Los resultados de las estrategias derivadas de este feminismo han colocado a México a la vanguardia en materia de adopción de mecanismos de inclusión de mujeres en los espacios de poder y en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la institucionalización de la perspectiva de género. Los avances en la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de política públicas, la aprobación de la “paridad en todo” en 2019 y la consecuente composición paritaria de las legislaturas, representan algunos de los logros del activismo de las feministas institucionales.

Este tipo de activismo se conceptualiza en la literatura especializada como feminismo institucional (Reverter, 2011), el cual alude a dos elementos: 1) la inserción de feministas en la burocracia y, 2) al activismo institucional presente en distintas arenas estatales como el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos (Zaremborg, Salas, López Jara, 2019: 231). A este fenómeno se le conoce también como “femocracia” para indicar la conformación de grupos de influencia de las mujeres dentro del Estado (Watson, 1991; Zaremborg y Guzmán 2019: 146). Teóricamente, la femocracia no conceptualiza al Estado un actor unitario, monolítico que actúe de acuerdo con un conjunto fijo o preestablecido de intereses y de naturaleza patriarcal, sino como un conjunto de espacios y prácticas donde los grupos de interés construyen e imponen parcial y temporalmente su influencia y, por tanto, se sitúa entre la variedad de estrategias y contraestrategias desplegadas por las mujeres en la construcción de relaciones de poder de género igualitarias (Watson 1991: 189).

Este texto analiza algunas de las estrategias implementadas por las feministas institucionales en México dirigidas a la aprobación de políticas para la igualdad, así como los obstáculos

que han enfrentado en la construcción de la femocracia. Se argumenta que el feminismo institucional ha logrado avances gracias a la formación de “actores críticos” (Palma, 2019) esto es, la colaboración de políticas de diferentes partidos, redes de mujeres organizadas, académicas, funcionarias desde diferentes ámbitos de decisión que diseñaron, negociaron y construyeron progresivamente una democracia paritaria. Los obstáculos que enfrentan son estructurales y se relacionan con la ineficacia institucional y percepciones discriminatorias o ciegas a la perspectiva de género de algunos líderes partidistas, decisores y hacedores de políticas conservadores.

Para sostener este argumento presentamos evidencia de una investigación en proceso basada en análisis documental de fuentes primarias y revisión hemerográfica cuyo objetivo es reconstruir un conjunto de “intervenciones feministas”, destacando aquellas que han contribuido a la construcción de la democracia paritaria y a la institucionalización de las políticas a favor de las mujeres en el Estado durante la última década del siglo XX -en el proceso de transición democrática- y las primeras dos décadas del siglo XXI (2000-2020). El texto se estructura en tres partes. La primera hace un encuadre conceptual del debate con la revisión de la literatura latinoamericana y anglosajona sobre feminismo institucional. La segunda analiza siete casos de políticas para la igualdad sustantiva y la institucionalización del género y las estrategias comunes o recurrentes de las feministas institucionales. Como se mostrará, el diseño de la democracia paritaria no ha ocurrido sin contradicciones, en tanto hay resistencias a ciertas iniciativas, como la despenalización del aborto, cálculos y culturas políticas de los partidos, así como diferencias entre distintos niveles estatales, por ello, la tercera sección analiza los obstáculos que han enfrentado y los problemas que persisten para la agenda feminista.

1. Democracia paritaria y feminismo institucional

En América Latina, después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) la influencia de las mujeres políticas comenzó a articularse con objetivos y agendas comunes dentro de las instituciones. A través de los partidos políticos algunas feministas se constituyeron como grupos de interés organizados (Cerva 2019: 2-4), con el objetivo de poner en la agenda pública los cambios graduales que tendrían que darse para lograr la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En la Cuarta conferencia participaron académicas, políticas, funcionarias públicas y de las organizaciones gubernamentales y una diferencia fundamental respecto de las tres Conferencias anteriores fue el acuerdo internacional para que las mujeres accedieran al poder (Cepeda, 2020).

Así, la Cuarta Conferencia mundial sobre la Mujer en Beijing fue un parteaguas para que las políticas mexicanas se articularan en la premisa del feminismo institucional de que el Estado, a través de sus instituciones y las mujeres en los espacios de decisión podrían llegar a ser elementos clave en la promoción de acciones para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres (McBridge Stetson y Mazur 1995, citado en Cerva 2019: 2). El feminismo institucional (Reverter, 2011) propone luchar por la igualdad desde las instituciones públicas y puede entenderse: 1) como la inserción de feministas en las instituciones, es decir, como burócratas, así como “intervenciones” en distintas arenas estatales. Esto es lo que algunas autoras llaman “femocracia” (Watson, 1991; Eisenstein, 1996) y, 2) Como alianzas entre actoras, burócratas, feministas activistas --que están en movimientos y organizaciones-- y académicas, que se proponen impulsar una agenda y legislación y promover políticas públicas.

Así, partimos de que el concepto *femocracia* (Eisenstein, 1996) alude a la presencia de mujeres procedentes del feminismo en la esfera de la administración del gobierno representativo, así como al activismo institucional presente en el legislativo (Zaremborg, Salas, López Jara, 2019: 231). Es una forma distintiva de intervención feminista que ocurre dentro del ámbito estatal para revertir la histórica exclusión de las mujeres en el poder público y poner los “temas de las mujeres”, “derechos de las mujeres”, “intereses de las mujeres” en el debate y construcción de las políticas. Esta perspectiva no presupone intereses comunes o esenciales de todas las mujeres. Los temas tratados por el feminismo institucional derivan de la histórica discriminación de las mujeres y los problemas que ha producido la desigualdad de género (Cerva, 2019).

En el estudio de Eisenstein (1996) sobre el caso paradigmático de Australia se muestra que un conjunto de servicios empezó a estar a cargo de mujeres con financiamiento del Estado: centros de información, refugios para mujeres, centros de salud para mujeres, entre otros.

También hubo un cambio en la retórica de las agencias del gobierno que reflejaron una aceptación del lenguaje feminista. Los primeros ministros impulsaron programas utilizando además un lenguaje que reconocía la desigualdad y las estructuras patriarcales. Lo mismo ocurrió en las campañas electorales: los temas feministas fueron incorporados y en los partidos se retomaron temas de género. Asimismo, se iniciaron programas de entrenamiento con perspectiva de género para el poder judicial.

Este tipo de feminismo tiene consecuencias importantes con relación a cómo se debe entender el Estado. El Estado no es un actor coherente que actúe como agente de un grupo (una clase o un género), sino que es el resultado de un conjunto de relaciones de poder. En este sentido, es un sitio de construcción de relaciones de poder de género, no es un actor unitario, monolítico que actúe de acuerdo con un conjunto fijo o preestablecido de intereses y, por tanto, se sitúa entre la variedad de estrategias y contraestrategias desplegadas por las mujeres (Watson, 1991). Desde esta perspectiva la cooperación feminista con el Estado tiene una doble dimensión: “como vehículo de cambio y como forma de control en la vida de las mujeres” (Reverter 2011: 227). Así, hay dos ejes de colaboración entre las feministas y el Estado: como políticas (o sociedad civil) posicionando o promoviendo la agenda feminista y como núcleo de diálogo crítico con los estados (Álvarez 1998 citada en Reverter 2001: 228).

2. Activismo institucional en México

Gran parte del fenómeno femócrata en México remite a las luchas feministas de los noventa que pasaron a ocupar espacios estatales, en el ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos. A partir de entonces, la institucionalización del género tuvo avances innegables en materia de presupuestos programados para programas de género (Anexo 13), institutos rectores de las políticas para mujeres, leyes para la igualdad, tipificación del feminicidio y otras expresiones de violencia, así como las cuotas de género y paridad que garantizan la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. ¿cómo fueron posibles estos cambios?

Para responder esta pregunta reconstruimos los procesos de promoción de siete políticas públicas feministas que han contribuido a la construcción de la femocracia y la

institucionalización de las políticas a favor de las mujeres en el Estado en tres ejes: la igualdad sustantiva, la eliminación de las discriminaciones y el combate a las violencias. A través del análisis documental de fuentes primarias y revisión hemerográfica identificamos los liderazgos, el contexto sociopolítico, las organizaciones, las estrategias utilizadas y su impacto en el proceso político de promoción, aprobación e implementación de políticas.

a) **La creación de institutos de las mujeres**

De acuerdo con Cerva (2019), en 1999 la priista Guadalupe Gómez Maganda, directora de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER)³ presentó a las legisladoras la propuesta para que la Comisión se transformara en un Instituto de la Mujer, a fin de ganar autonomía técnica y de gestión. Paralelamente la priista cabildeó el apoyo por parte de Ernesto Zedillo, titular del Ejecutivo Federal, pero el mandatario la desautorizó públicamente (Cerva 2006: 8-9). En la coyuntura de la alternancia de género fue cuando se produjo la colaboración entre las diputadas de la nueva legislatura. La Comisión de Equidad y Género convocó a representantes de todos los partidos, integrantes de la sociedad civil y de la CONMUJER (Cerva 2006:13), quienes preocupadas por la llegada al poder de actoras panistas, de tradición conservadora y principios ligados a la familia crearon una nueva institución con un exceso de candados administrativos -como la creación de los consejos consultivos y social, la junta de gobierno y los nombramientos administrativos-, los cuales tenían como objetivo “frenar la influencia que el panismo pudiera representar” (Cerva 2006:14).

En este escenario surgió en enero de 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo descentralizado de la administración pública, con autonomía técnica y de gestión para diseñar las políticas de género a nivel federal. A nivel estatal dicha tarea fue asignada a cada unidad federativa. El primer programa fue el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación (PROEQUIDAD) (una continuidad del PRONAM), con contenidos que fueron fruto de foros de consulta ciudadana (Cerva 2006:15). La característica de este programa era incluir las nociones de institucionalización de la perspectiva de género

³ La Comisión Nacional de la Mujer fue un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya tarea principal era dar seguimiento al Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual constituyó el “primer paso explícito en el establecimiento de una institucionalidad abocada a las mujeres y el género” (Cerva 2006: pág. 8).

como objetivo de política, a través de la transversalización como estrategia de impacto en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. De esta manera las feministas usaron las instituciones para generar cambios en la concepción y el quehacer de la política pública. Desde esta perspectiva, “institucionalizar el género supone permear la estructura de las instituciones públicas al integrar la dimensión de género en el análisis e interpretación de los problemas sociales” (Cerva 2006: 16). En este escenario las feministas hablaban de un nuevo paradigma en el proceso de planeación e implementación de las políticas con capacitación/sensibilización/asesoría en materia de género, generación de información estadística e indicadores de género, colaboración institucional y políticas sectoriales como ejes prioritarios de acción.

b) Presupuestos públicos con perspectiva de género: ingresos y egresos

Desde 2008 los recursos y programas federales para la igualdad entre mujeres y hombres se detallan en un anexo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación denominado Anexo 13 (Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), aunque su proceso inició al menos 12 años antes (Cepal, 2013). Algunas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron en ese transcurso fueron 1) Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia y 2) el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, los cuales contaron con el apoyo de Inmujeres una vez creado (Cepal, 2013:3). En el contexto del cambio político de la transición se inauguró una tendencia a desarrollar presupuestos públicos por desempeño y en 2003 la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados comenzó a etiquetar y reasignar gastos para atender la problemática más urgente de las mujeres (salud reproductiva, pobreza y violencia), promover la igualdad de género y apoyar el proceso de transversalidad.

En 2006 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispuso que la administración de los recursos públicos debía realizarse “sobre la base del criterio de equidad de género” (entre otros). Ese mismo año el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 incluyó dos artículos transitorios referidos a la promoción de la igualdad de género desde el gobierno federal y al papel de INMUJERES como instancia encargada de entregar los informes trimestrales sobre las acciones para el adelanto de las mujeres género. En 2008, los recursos de género se detallaron en un anexo específico denominado “Presupuesto para mujeres y la igualdad de género” y que luego pasó

a llamarse “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” (Anexo 13). El Anexo 13 presenta el presupuesto desagregado por ramos administrativos y programas presupuestarios a los que la Cámara de Diputados etiqueta recursos públicos federales para las mujeres y la igualdad de género. Adicionalmente, en 2009 el artículo referido al género se incluyó como capítulo (capítulo IV de la perspectiva de género que evolucionó hasta convertirse en Capítulo IV De la igualdad entre mujeres y hombres). Así, las diputadas de la Legislatura 2006-2009 sacaron la política de género del marco de los programas sujetos a reglas de operación y la ubicó dentro de los lineamientos generales del ejercicio del presupuesto, con lo cual se amplió la posibilidad de realizar acciones no contempladas en dichos programas y en los gastos etiquetados.

Por muchos años la perspectiva de género en el paquete económico del Estado se concentró únicamente en la política de egresos (gasto público), dejando de lado la política fiscal (tributaría o de ingreso público). Hasta 2020 el colectivo Menstruación Digna Mx señaló que el impuesto de 16 por ciento a los productos de gestión menstrual era sexista y reproducía la desigualdad entre mujeres y hombres. El colectivo propuso una iniciativa a través de la diputada Martha Tagle, pero el Pleno de la Cámara de Diputados la rechazó, por lo cual, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas promovió una acción de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados para pedir que la SCJN se pronunciara sobre si la política de ingresos es válida sin perspectiva de género (AI, 308/2020).⁴ La colectiva Menstruación Digna México, alumnas y académicas de educación superior y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México promovieron cuatro *amicus curie* sobre la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual (Fundar 2021). La SCJN aceptó revisar el asunto y se esperaba que en uno o dos años emitiera una resolución. Un giro inesperado en este proceso fue que la Secretaría de Hacienda incluyó la tasa cero de los productos de gestión menstrual en la propuesta para el paquete económico de 2022, es decir, se reabrió la discusión por iniciativa del Poder Ejecutivo Federal. En esta ocasión la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión.

⁴ Formalmente la Acción de Inconstitucionalidad fue presentada por integrantes de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

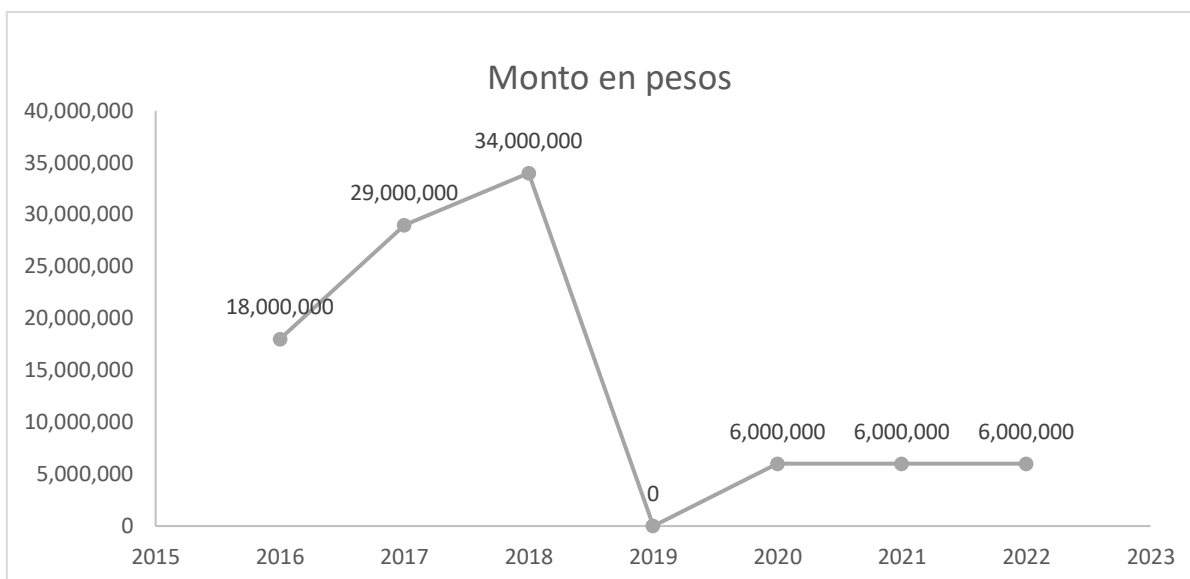
c) Las comisiones de Equidad/Igualdad de Género y las unidades de género

Las medidas para institucionalizar el género en el Poder Legislativo han sido diversas. En septiembre de 1997 fue aprobada la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros, nombre provisional mientras sus integrantes presentaban propuestas y un programa de trabajo. La Diputada Alma Vucovich, del Partido de la Revolución Democrática fue nombrada la primera presidenta de la comisión. Por su carácter de “especial”, la comisión no pudo dictaminar iniciativas. Por ello, la diputada Sara Esthela Velásquez, del PRI, presentó una iniciativa para crearla como una Comisión Ordinaria con las atribuciones que se le confieren a todas las comisiones con ese carácter. Dicha propuesta fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. A partir del inicio de la LVIII Legislatura (2000) la Comisión de Equidad y Género se convirtió en Comisión Ordinaria. La Diputada Concepción González Molina (PRI) fue la primera presidenta de la nueva comisión ordinaria.

Desde 2005 la Cámara de Diputados creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), un espacio para asesorar el trabajo legislativo con perspectiva de género y derechos humanos, a través del apoyo técnico y especializado respecto de la agenda legislativa para la igualdad entre mujeres y hombres. La iniciativa para su creación fue presentada por Diva Gastélum (PRI) y algunas feministas y organizaciones no estuvieron de acuerdo. De acuerdo con Martha Tagle “El CEAMEG fue un logro de la 59 legislatura, pero hacia la siguiente legislatura el tema se convirtió nuevamente en un asunto de botín político” (Martínez 2010: 182).

Pese al logro feminista en esta materia, la evolución del presupuesto etiquetado para la institucionalización de la perspectiva de género en el Poder Legislativo, es decir, para la Unidad de género en el ámbito legislativo bajó considerablemente desde 2019 (Gráfica 1), lo cual muestra que los mecanismos de género no son una prioridad del gobierno en turno, y que aún depende de los gobiernos y la voluntad de dirigentes políticos si la institucionalización de género se mantiene como política de Estado, o no.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto para Unidad de género y la institucionalización de la perspectiva de género en el ámbito legislativo 2016-2022



Fuente: Tomado de Cámara de Diputados (2022:2).

d) **Feminicidios y la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia**

La preocupación por las violencias contra las mujeres ha sido una constante de la agenda feminista. En 2007 Marcela Lagarde y de los Ríos, la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados (2006-2009) y políticas de gran trayectoria como Diva Gastelum y Angélica de la Peña lograron la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sustentada en el trabajo científico de 60 investigadoras (Lagunes, 2017). El objetivo era crear una ley que no solo sancione la violencia (perspectiva punitivista), sino también que sentaría las bases de una política de Estado para prevenir, atender y eliminar las violencias (Lagarde, citada en Lagunes 2017). La ley -en adelante LGAMVLV- reconoció la “violencia feminicida”, la alerta de género, cinco tipos y cinco modalidades de violencia. También surgió el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias de las Mujeres en México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Fiscalía Especial para Atender Delitos de Violencia contra las Mujeres (a la que después se le añadiría la Trata de Personas).

En términos de influencia feminista, Marcela Lagarde afirma que estuvo influenciada por la Convención Belém do Pará, por Alma Vucovich, exdiputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien quería explicaciones (y soluciones) feministas sobre los asesinatos

de mujeres en Ciudad Juárez; Diana Rossel y Jean Ralsfo quienes desarrollan una incipiente teoría sobre feminicidio. La feminista también destaca que eran minoría numérica en la Cámara de Diputados con 22 por ciento de escaños, y eran minoría ideológica con solo cuatro legisladoras 4 autodefinidas feministas (Lagunes 2017). Pese a ello hubo una alianza interpartidista que discutió “casi palabra por palabra” la nueva ley que dictara la política de Estado contra las violencias de género. En ese escenario las negociaciones fueron pieza clave al punto que Lagarde afirma: “Nos quitaron de la ley el delito de feminicidio, por técnica jurídica y penal. Entonces dijeron “hagamos una negociación, ustedes quitan el delito de feminicidio y aprobamos la ley”” (Lagarde citada en Lagunes 2017). En el proceso participaron procuradoras, defensoras de derechos humanos, científicas y políticas.

Fue hasta 2010 cuando comenzó el proceso de tipificación del delito de feminicidio, posterior a la publicación de la sentencia del caso González y Otras vs. México, conocido como Campo Algodonero, así como la recomendación 19 realizada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que se exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias que garantizar una adecuada tipificación de los feminicidios en los códigos penales locales e implementar protocolos de investigación policial para el feminicidio (Cedaw, 2012).

Pese a los avances legislativos y de políticas públicas, las cifras oficiales sobre feminicidios y otras expresiones de violencias contra las mujeres (homicidios dolosos, violencia sexual trata de personas, etcétera) han incrementado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), junio de 2022 rompió el máximo histórico de homicidios dolosos de mujeres con 281 casos. A ello se suman las cifras de feminicidios (493 casos entre enero y junio de 2022) (SESNSP, 2022). En este escenario identificamos algunos obstáculos que han enfrentado las feministas institucionalistas en la implementación de las políticas para eliminar las violencias contra las mujeres.

Primero, el proceso de tipificación del delito de feminicidio fue realizado por las legislaturas de las entidades federativas, lo que causó gran variación en las definiciones y los elementos que componen el tipo penal y, por ende, de los diferentes criterios para acreditar la conducta sancionable (Zepeda y Jiménez, 2020: 5). Más aún, la responsabilidad de investigar e integrar la carpeta de manera ministerial, policial y pericialmente por el delito de feminicidio quedó

como una responsabilidad de las fiscalías estatales, las cuales son organismos autónomos (independientes del Poder Ejecutivo). Además, cada fiscalía tiene sus propios Protocolos de investigación del delito de feminicidio. En este escenario, las organizaciones de mujeres identificaron que pocos asesinados dolosos de mujeres (intencionales) se tipificaban como feminicidios. Por ello, en 2015 la SCJN resolvió que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales, y que es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia (SCJN, 2015).

El segundo obstáculo para la eficacia de la política del Estado mexicano contra los feminicidios, identificado por Marcela Lagarde, es la descoordinación entre las diferentes instancias con atribuciones y facultades en los diferentes niveles de gobierno para combatir las violencias contra las mujeres (Lagarde citada en Lagunes 2017). Desde su perspectiva, la descoordinación de las instituciones es resultado del diseño mismo de la Ley que creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias de las Mujeres en México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la así llamada en ese momento Fiscalía Especial para Atender Delitos de Violencia contra las Mujeres, las cuales empezaron a trabajar “sin entender bien la ley” (Lagarde citada en Lagunes 2017).

El tercer obstáculo denunciado por organizaciones feministas es la reducción del presupuesto asignado para programas emblemáticos de combate a las violencias contra las mujeres como las alertas de género, los centros de justicia para las mujeres, el embarazo adolescente, la protección para defensoras de derechos humanos y los bancos de datos. Salvo algunas excepciones,⁵ en general, todos los programas para combatir las violencias de género han tenido disminuciones presupuestales desde 2018 (Fundar, *s.f.*).

e) Cuotas de género y paridad: hacia un nuevo modelo democrático

⁵ El Programa de coordinación y seguimiento a la política nacional integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres aumentó 15.88 por ciento en 2022 (Fundar, *s.f.*).

En 2011 la Red de Mujeres en Plural desarrolló litigio para demandar el cumplimiento de la cuota de género vigente (40-60). Las mujeres organizadas y encabezadas por María Elena Chapa cabildearon con las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la aplicación plena de la cuota de género en candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, lo cual derivó en la sentencia 12624, considerada histórica porque fue promovida por mujeres militantes de distintos partidos políticos, por académicas y exfuncionarias públicas expertas en la agenda de género, quienes encontraron en la vía jurídica una manera de garantizar la aplicación plena de la legislación electoral en materia de inclusión de mujeres en espacios de poder.

Posteriormente, en el Contexto del Pacto por México (2014) se aprobó la paridad en la postulación de candidaturas a cargos legislativos federales y locales. La propuesta fue una iniciativa presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto promovida por legisladoras de diferentes grupos parlamentarios, quienes negociaron la paridad constitucional con las élites partidistas y el mandatario del Poder Ejecutivo Federal (Peña, 2014; Hevia, 2019). Dos senadoras protagonistas fueron Diva Gastélum Bajo (del PRI), y Angélica de la Peña (del PRD), quienes han comentado en entrevistas que tenían que movilizarse e insistir con los coordinadores de los grupos parlamentarios para que no quitaran la paridad del dictamen de las comisiones durante la noche antes de subirla a la gaceta legislativa para la discusión del Pleno. Así lo relata Diva Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género (Gastélum 2018):

El resultado que tenemos no se entendería sin Angélica de la Peña. Nuestra secretaria [de la Unidad de género del Senado]. En la madrugada del tema paritario: eran las cuatro de la mañana y nos habían tirado un inciso. [...] yo le hablé y le dije Angélica, ¿qué crees?, todo lo que nos dijeron a las nueve se cayó a las cuatro de la mañana. ¡Cómo! Pues me voy a salir del hospital. Fue una corredera tremenda ese día. [...] El tema paritario, para concretar con los hombres del poder es muy complicado. Ahí no puedes sacar una pancarta, no puedes gritar. Ahí te comportas [...] con compromiso y seriedad logramos la democracia paritaria. Eso sí me lo voy a llevar a la caja porque es una escena digna de escribirse. Finalmente salió democracia paritaria.

Incluso las legisladoras señalan que todo aquello que no podía justificar frente a su partido por la disciplina y vida interna de las organizaciones, lo incluían en la discusión diciendo que fueron demandas de las legisladoras de otros partidos (Gastélum 2022). El objetivo común era, primero incluir el tema en la propuesta legislativa (dictamen) y después vigilar que no se quitara antes de su aprobación en el Pleno. Una vez más, las legisladoras colaboraron entre sí más allá de los límites partidistas. Así lo relata Diva Gastélum (2022):

Yo les voy a contar cómo le hacíamos. Lo que las priistas no podíamos hacer, decían esto no le puedo pedir a alguien, tú del PRD lo tienes que hacer, o tú del PAN, y entonces cuando a mí me preguntaban qué pasó Diva con eso, digo, no sé, enloqueció Angélica, no me hace caso, no me hace caso [...] no sé qué voy a hacer con ella.

En 2019 la paridad de género fue ampliada constitucionalmente a todos los espacios de poder: los gabinetes del Ejecutivo (federal y estatal), el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, pueblos y comunidades indígenas y órganos internos de los partidos políticos. Nuevamente, la aprobación de la ley fue producto de las alianzas de legisladoras de todos los partidos políticos, con el apoyo de redes de mujeres organizadas como la Red de Mujeres en Plural y 50+1. Malú Micher (Morena), Kenia López Rabadán (PAN), María del Carmen Alanís (exmagistrada electoral), Wendy Briseño (Morena) y Xóchitl Gálvez (PAN) fueron actoras clave en las negociaciones para la aprobación de la paridad en todo. Incluso las negociaciones llegaron al punto de eliminar la paridad en las gubernaturas para lograr la aprobación de la reforma constitucional (Vázquez, en prensa). Como consecuencia de esta lucha de mujeres paritaristas, en 2022 todas las legislaturas del país son paritarias. En la Cámara de Diputados hay más mujeres que hombres (251), en el Senado de la República hay 50% de legisladoras. Las legislaturas locales son paritarias (50-50) o con mayoría de mujeres (excepto 5 casos en que la diferencia entre hombres y mujeres es de un escaño porque la magnitud del congreso es impar), y a finales de 2022 habrá nueve gobernadoras en ejercicio del cargo simultáneamente.

f) El activismo desde todos los espacios de poder: tribunales electorales, INE y OPLEs

La construcción de la democracia paritaria en México no podría entenderse sin el análisis del papel de las feministas en las instituciones electorales como el TEPJF, el INE y los OPLEs,

los cuales han sido claves para vigilar el cumplimiento de las cuotas de género y la aplicación plena de la paridad. En estas instancias -locales y federales- se promovieron la paridad horizontal y vertical en los municipios, la colocación de mujeres candidatas en distritos competitivos, la paridad en la integración de las legislaturas, el financiamiento y acceso a medios de comunicación al menos de 40 por ciento para mujeres, las acciones afirmativas para incluir grupos históricamente subrepresentados como las personas indígenas, afroamericanas, migrantes, de la diversidad sexual y con discapacidad (interseccionalidad), entre otras medidas para garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de poder en ambientes libres de violencia.

La *3 de 3 contra la violencia* también fue impulsada desde el Instituto Nacional Electoral. La política consiste en exigir a los partidos que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme por: 1) violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; 2) por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o por 3) ser deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias (salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancelen su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios). La propuesta signada por más de 1,300 activistas, organizaciones de la sociedad civil, regidoras, diputadas federales y locales, y alcaldesas, fue presentada al Consejo General del INE por legisladoras de la Cámara de Diputados y la organización Las Constituyentes CDMX.

El activismo de mujeres feministas a través de instituciones como el INE y el TEPJF ha sido clave para garantizar la aplicación plena de la paridad en todos los cargos de elección popular y la paridad en gubernaturas no es la excepción. La ciudadana Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante a la gubernatura de Michoacán y apoyada por las organizaciones Equilibra, Centro para Justicia Constitucional y Litiga, solicitó al INE que implementara diversos criterios que garantizaran la paridad en la postulación de candidaturas a las gubernaturas para el proceso electoral 2020-2021, lo cual fue fundamental para poner el tema en la agenda pública.

Durante la discusión de la paridad en gubernaturas en el INE identificamos cuatro posturas diferentes entre las que se distribuían las y los actores políticos: 1) las organizaciones de la sociedad civil solicitaban la aplicación de la paridad en gubernaturas, 2) la Dirección de Prerrogativas y Partidos del INE no favorecía los criterios con el argumento de que es competencia de los OPLEs, 3) el Senado argumentaba abiertamente que aprobar paridad en gubernaturas en el INE “extralimitaba las facultades” (sic.) de dicho órgano, y, 4) la Comisión de Género de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados solicitaba la aplicación de la paridad en las gubernaturas durante el proceso electoral. En este escenario el Consejo General del INE aprobó un Acuerdo para obligar a los partidos nacionales a postular como candidatas en mínimo siete entidades a mujeres, en lo individual, en coalición o en candidatura común. Pese a que el Acuerdo fue impugnado por el PAN, el Partido de Baja California y el Senado de la República, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en siete entidades federativas los partidos políticos tenían la obligación de nominar mujeres en la elección de 2021. Con algunas variaciones en el procedimiento, en las sucesivas elecciones también fue aplicada la paridad en las gubernaturas.

g) Violencia política contra las mujeres y violencia digital

En los últimos años México ha reconocido dos modalidades adicionales de violencia: la política (2020) y la digital y mediática (2021).⁶ El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por el cual se tipifica el delito en el ámbito penal, electoral y de responsabilidades administrativas. Además, otorga competencias a las autoridades electorales locales y federales para prevenir, atender, sancionar, emitir medidas cautelares y resarcir el daño a las víctimas (DOF, 2020). La propuesta contó con la colaboración de la Red de Mujeres en Plural, la exmagistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís, y fue aprobada por unanimidad en el pleno de las dos cámaras del Congreso General (Diputados y Senado).

⁶ Las primeras cinco modalidades de violencia contra las mujeres fueron aprobadas en 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia y fueron la familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional y feminicida.

Durante la misma legislatura, en 2021 el Congreso aprobó diversas reformas para combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales, conocida como Ley Olimpia. Las reformas legislativas reconocen las violencias digital y mediática como una modalidad de las agresiones por razones de género, tipifica el delito de violación a la intimidad sexual e impone sanciones penales y civiles a quien exponga, distribuya o difunda audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Impulsada por la activista Olimpia Coral Melo y una red de apoyo de mujeres feministas la Ley Olimpia ha sido aprobada en las leyes penales de 29 entidades federativas.

3) Los hallazgos

A pesar del incremento de estudios, informes, estadísticas y políticas públicas para las mujeres que derivaron de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género que las femócratas implementaron en México en las primeras dos décadas del siglo XXI (2000-2020), la realidad de las mujeres no ha cambiado del todo y en muchos aspectos han empeorado, como es el caso de las violencias. En los últimos años han aumentado las protestas de mujeres en las calles para manifestar el hartazgo y preocupación por el incremento de las violencias y la ineficacia de las instituciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios, desapariciones y otras expresiones de violencia. Para el movimiento feminista que retomó las calles para protestar en México en los últimos años, las políticas públicas no han funcionado y las instituciones no han dado los resultados esperados por las femócratas que crearon grupos de influencia dentro del Estado. En este contexto, se ha cuestionado la suficiencia de apelar al Estado mexicano como estrategia para luchar por cambios que permitan superar las desigualdades de género (Zaremborg 2019).

La paradoja no es menor y consiste en preguntarse porqué la mayor presencia de mujeres en distintos niveles de gobierno no ha sido suficiente, ni eficaz, para combatir problemas graves como el feminicidio y otras expresiones de violencias. En otras palabras, por qué la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género de las últimas dos décadas no ha sido suficiente como herramienta para prevenir, atender, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres. Si bien, México ha avanzado en los mecanismos para registrar las carpetas e investigación y llamadas de emergencia por delitos de violencias

contra las mujeres, cómo explicar el incremento de los delitos y la impunidad asociada a ello en un país donde se ha legislado y asignado presupuesto programado a las políticas para prevenir y erradicar las violencias.

En esta sección no abordaremos esta paradoja, sino que a partir de la revisión de las estrategias de las feministas institucionalistas identificamos cuatro acciones comunes que explican cómo han logrado avances en la agenda de las mujeres y la construcción de la democracia paritaria. La primera es la colaboración entre mujeres más allá de ideologías partidistas, victorias individuales o triunfalismos de partidos mayoritarios. Las feministas no solo han conformado bloques de apoyo con mujeres de otros partidos, sino también con organizaciones, académicas, periodistas y mujeres funcionarias de otras instituciones como el INE, los OPLEs, los tribunales (Palma, 2019).

Segunda, el avance en la institucionalización del género y la agenda feminista ha sido progresivo. Es decir, las feministas han obtenido logros primero con recomendaciones, programas, propuestas, exhortos y, poco a poco, las políticas se han ido robusteciendo con reformas incrementales. Por ejemplo, la adopción de presupuestos programados para la igualdad entre mujeres y hombres, las comisiones legislativas para la igualdad con facultades plenas, las acciones afirmativas y paridad, entre otras. Así, las activistas institucionales fueron construyendo la femocracia de manera progresiva, no con reformas definitivas. La contraparte de esta característica es que los cambios no siempre han sido para mejorar o fortalecer las políticas para la igualdad.

Tercera, las estrategias de cabildeo y promoción de políticas de género desde las instituciones varían desde el litigio estratégico con juicios e impugnaciones (sentencia 12624), hasta los *amicus curie* (menstruación digna, despenalización del aborto), las iniciativas legislativas (paridad en todo, ley olímpica, violencia política), investigaciones académicas (sobre feminicidio), solicitudes ciudadanas al INE (3 de 3 contra la violencia y paridad en gubernaturas), el apoyo en redes sociales, foros, conferencias de prensa, posicionamientos, exhortos, entre otras. El trabajo técnico operativo con perspectiva de género desarrollado por las secretarías de estudio en la SCJN (Cortez 2019), las secretarías instructoras en el TEPJF, las secretarías técnicas en las comisiones legislativas -y sus contrapartes en otros espacios de toma de decisión- también han contribuido al diseño de políticas para la igualdad sustantiva.

Todo ello aporta evidencia al argumento de que las instituciones estatales se sitúan entre la variedad de estrategias y contraestrategias desplegadas por las feministas en la construcción de relaciones de poder de género igualitarias (Watson 1991).

Cuarto, el cabildeo y la promoción de políticas ha tenido diferentes escenarios y algunos han sido más favorables para el avance de la agenda feminista que otros. Por ejemplo, la despenalización del aborto ha avanzado más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en los congresos locales (Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Baja California, Colima, Coahuila y Guerrero). En el congreso federal ha estado estancada la discusión pese a que el grupo mayoritario es de izquierda, las legislaturas tienen paridad en la integración y muchas legisladoras se autoidentifican como feministas. La paridad en gubernaturas, las acciones afirmativas para grupos históricamente subrepresentados y la *3 de 3 contra la violencia* fueron impulsadas desde el INE y el TEPJF. Por su parte, el Poder legislativo tuvo avances importantes en la paridad en todo (reforma constitucional de 2019) y el marco normativo para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Poder Ejecutivo fue determinante para que se aprobara la tasa cero a los productos de gestión menstrual.

Algunos desafíos que identificamos fueron los siguientes. La influencia (como práctica informal) de los mandatarios federales y líderes partidistas para hacer avanzar u obstaculizar la agenda de las mujeres. Esta situación fue observada en el sexenio de Ernesto Zedillo para la creación del instituto nacional de las mujeres, la simulación de los partidos para cumplir con las cuotas de género que dio pie a la sentencia 12624, la relevancia del cabildeo con Peña Nieto para la reforma de paridad de 2014, el papel de los senadores en la impugnación de la paridad en gubernaturas (2020) y los retrocesos para atender a mujeres víctimas de violencia, para guarderías, escuelas de tiempo completo, o la eliminación de la unidad de género del IECM durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este escenario da pie a la reflexión sobre lo endeble de la institucionalidad del género si ésta depende de la voluntad de los mandatarios, grupos mayoritarios, líderes partidistas o coordinadores parlamentarios.

El segundo refiere a la debilidad institucional que persiste para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Algunas investigaciones de colectivas feministas han documentado la impunidad que persiste en materia de violencias contra las

mujeres, las fallas en las instituciones de impartición de justicia y las deficiencias de las fiscalías, principalmente las locales. La debilidad institucional se hace aún más notable cuando los problemas sociales y su atención demandan la coordinación entre las instituciones (Lagarde citada en Lagunes 2017). Por ejemplo, el INE ha alertado sobre la dificultad para acceder a la información sobre las personas deudora alimentarias para aplicar plenamente la 3 de 3 contra la violencia. Por su parte el TPJF ha señalado la omisión legislativa de la mayoría de los congresos locales y el Congreso de la Unión para legislar la paridad en las gubernaturas.

Consideraciones finales

Este ensayo analizó la forma en la cual se ha construido la democracia paritaria en México a partir del examen de un conjunto de intervenciones feministas. Para ello, se identificaron liderazgos políticos feministas institucionales y política dirigidas para la igualdad sustantiva. En este sentido, se ubicaron liderazgos clave como los de Guadalupe Gómez Maganda (PRI), Alma Vucovich (PRD), Marcela Lagarde (PRD), María Elena Chapa (PRI), Diva Gastélum (PRI), Angélica de la Peña (PRD), Sara Esthela Velásquez (PRI), Malú Micher (Morena), Kenia López Rabadán (PAN), Martha Tagle (MC), Laura Rojas (PAN). También identificamos a algunas especialistas que influenciaron a las legisladoras en diversos temas de la agenda de género: Diana Rossel, Jean Ralsfo, Mercedes Barquet, María del Carmen Alanís, Teresa Hevia y la activista Olimpia Coral. Algunas organizaciones destacadas fueron la Red de Mujeres en Plural, 50+1, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Diversa, agrupación política feminista, Menstruación Digna México.

A partir de la reconstrucción de siete políticas públicas, que llamamos intervenciones feministas, identificamos cuatro estrategias que explican cómo se ha construido progresivamente una democracia paritaria. La primera es la colaboración entre mujeres más allá de ideologías partidistas, victorias individuales o triunfalismos de partidos mayoritarios. Las feministas institucionalistas crean redes de apoyo a favor de ciertos marcos normativos que trascienden los límites partidistas, permiten a las políticas de grupos minoritarios influir en las políticas y canalizan la participación de las activistas y organizaciones de la sociedad civil. Todo ello favorece a la toma de decisiones más colaborativa que competitiva y, por

tanto, a una mayor representación de los intereses de las mujeres. El segundo hallazgo fue que los avances en la agenda para la igualdad han sido progresivos y las políticas se han ido robusteciendo, mejorando o ampliando con reformas incrementales en el tiempo. En ese proceso, vigilar la aplicación efectiva de las políticas ha sido un elemento clave para corregir las fallas en los diseños de las políticas para avanzar en la construcción de la democracia paritaria.

El tercer hallazgo fue la variación en las estrategias de cabildeo y promoción de políticas que implementan las feministas institucionalistas. Las feministas promueven iniciativas legislativas, practican litigio estratégico, desarrollan investigaciones académicas, hacen solicitudes ciudadanas, llaman a foros y conferencias de prensa como mecanismos para robustecer técnicamente las políticas para la igualdad sustantiva. El cuarto hallazgo fue que algunas instituciones han sido más permeables que otras en relación con ciertas agendas. Por ejemplo, el aborto legal ha tenido más avances en la SCJN y los congresos locales que en el Congreso General. La normativa sobre paridad en ambientes libres de violencias ha tenido avances desde los espacios legislativos y organismos electorales. Esto es importante porque abona al planteamiento teórico de las feministas institucionalistas de que la inclusión y participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones es una vía o estrategia para la construcción de relaciones de poder más igualitarias.

Los obstáculos y resistencias que enfrentan las feministas institucionalistas son estructurales. En este ensayo identificamos tres: los cálculos y culturas políticas de los partidos, la influencia de los mandatarios federales y líderes partidistas para hacer avanzar u obstaculizar la agenda de las mujeres, así como la debilidad institucional que persiste y se hace aún más notable cuando los problemas sociales y su atención demandan la coordinación entre las instituciones. Por ello, algunas agendas han tenido retrocesos o estancamientos como el incremento de las violencias contra las mujeres, el Sistema Nacional de Cuidados, la legalización del aborto y los recortes a los presupuestos para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Todo ello muestra que la continuidad de los mecanismos y las políticas para la igualdad de género aún depende de la voluntad de dirigentes políticos.

Referencias

- Cámara de Diputados (2022). Comparativo Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres PEF 2021 Vs PPEF 2022. Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de género. Disponible en <https://bit.ly/3ovUFCh>
- CEPAL (2013). El Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en México: Un avance para garantizar la autonomía de las mujeres. Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Cepal. Disponible en <https://bit.ly/3cE7UOC>
- Cerva Cerna, Daniela (2006). Trayectorias de los mecanismos institucionales a favor de la equidad de género en México. En *Compendio de Avances de la Perspectiva de Género en las Acciones Legislativas*, Santillana, México, 2006. Comisión de Equidad y Género, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, p. 253-271.
- Cerva Cerna, Daniela (2019). El juego político detrás del nombramiento de la titular del Inmujeres en la inaugurada administración de AMLO: Análisis desde el feminismo institucional. Revista Buen Gobierno No. 27 Julio-Diciembre 2019 e-ISSN: 2683-1643. Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México.
- Cortez Salinas, Josafat. (2019). Secretarios de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de México: Un actor esencial pero olvidado. *Política y Gobierno* 26, n.º 2, p. 219-236.
- Eisenstein, Hester. (1996). Inside Agitators: Australian femocrats and the state. Filadelfia, Temple University Press.
- Fundar (2021). Menstruación sin IVA, una política con perspectiva de género. Fundar Centro de Análisis e Investigación. 6 de septiembre de 2021. México. Disponible en <https://bit.ly/3BjHX1d>
- Fundar, (s.f.). Presupuesto Federal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Fundar Centro de Análisis e Investigación. México. Disponible en <https://bit.ly/3OCdtKS>

- Gastélum, Diva (2018). Pase de estafeta. Retos y desafíos para la igualdad sustantiva. Canal del Congreso. 14 de agosto de 2018. Minuto 22:00-23:43. Disponible en <https://cutt.ly/XZp2IPX>
- Gastélum, Diva (2022). Foro Legisladoras abriendo brecha para la igualdad. Cámara de Diputados, 31 de marzo de 2022. Minuto 1:42:35-1:43:01. <https://www.youtube.com/watch?v=xw8DiaiaeMQ&t=6s>
- Hevia, Tere. (2019). México y el logro de la paridad en el poder legislativo. 2018. (No publicado).
- Lagunes, Lucía, (2017). Marcela Lagarde, a 10 años de la LGAMVLV. Cimac Noticias. Periodismo con perspectiva de género. Disponible en <https://bit.ly/3vdMm1N>
- Martínez Medina, Diana (2010). Redes de política pública y construcción de agenda de género en el legislativo mexicano (1997-2009). Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; FLACSO México. México.
- Ortiz Ortega, Adriana, Scherer Castillo, Clara. (2014). Contigo aprendí: una lección de democracia gracias a la sentencia 12624. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Palma, Esperanza, (2019). Los números de la subrepresentación política de las mujeres en México y la lucha por los derechos político-electorales. En Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa González Luna (coords.). La métrica de lo intangible: del concepto a la medición de la discriminación. México: CONAPREED/Universidad de Guadalajara, pp. 95-125.
- Palma, Esperanza. (2021). Paridad de género. Prontuario Democracia. (<https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/paridad-de-genero/>).
- Palma, Esperanza y Rangel, Beatriz, (2022). *Avances y perspectivas de la democracia paritaria en los procesos electorales locales y federales de 2018*. México: Instituto Nacional Electoral.

- Peña, Blanca Olivia. (2014). La paridad de género: eje de la reforma político-electoral en México. *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, (14), 31-74.
- Reverter Bañón, Sonia. (2011). Los retos del feminismo institucional. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 223-229.
- Vázquez, Lorena (en prensa). Del dicho al hecho: paridad en gubernaturas ¡Ya! ¿Quién nos representa? Democracia y representación política en México: un análisis de las elecciones de 2021. Palma, E., Tejera, H., y Monsiváis A. (coords), México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Watson, Sophie. (1991). Femocratic feminisms. *The Sociological Review*, 39, 186-204.
- Zaremborg, G., Salas, K., & López Jara, M. D. (2019). Buscando brújula: Política de transversalidad de género en el nivel municipal en México (2006-2018). Marchas y contramarchas en las políticas locales de género. *Dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina*, 229-257.

Documentos oficiales consultados

- AI, (2020). Acción de inconstitucionalidad 308/2020. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en <https://bit.ly/3oPtHpz>
- CEDAW, (2012). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 52º período de sesiones, 9 a 27 de julio de 2012. Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10922.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10922>
- CIDH, (2009), Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre. Serie C No. 205.
- DOF, (2020). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2020.

SCJN, (2015). Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.). Femicidio. Las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 18, t. I, mayo de 2015, p. 439, reg. digital 2009087.